

En esta última semana ha tenido lugar un capítulo más de la tragedia que enluta al departamento del Cauca. De nuevo, las Farc han arremetido contra la Fuerza Pública y, como es la triste costumbre, sus acciones han dejado heridos y destrozos entre la población civil, con el agravante de que entre los blancos estuvo un centro médico.

El capítulo tiene mucho en común con los anteriores: hostigamientos a los policías refugiados en su cuartel, ciudadanos que huyen de los combates y milicianos al acecho. No obstante, algo inédito ocurrió en la presente oportunidad -además del prolongado retén que revivió tenebrosas escenas frecuentes en los 90- y fue la decisión de los indígenas, mayoría en la región, de expresar con hechos su hastío frente a los cada vez más frecuentes episodios de guerra.

Así, cansados de estar en medio del fuego cruzado, buscaron a la guerrilla para pedirle que se retirara y cesara en los ataques. Al mismo tiempo, la Asociación de Cabildos Indígenas le envió el lunes una fuerte misiva al líder guerrillero 'Timochenko' en respuesta a un comunicado del comando conjunto de occidente de las Farc. En medio de críticas a sus prácticas bélicas y reprimendas por acciones de los últimos meses que han cobrado la vida de miembros de su entorno, les reitera que no comparte su lucha y censura sus métodos violentos. «Los mayores de las comunidades dicen que ustedes patinan y patinan en el mismo barro y se hunden cada vez más. Están tan metidos en esa lógica de la guerra que no ven las cosas de otro modo que no sea el de mandar y hacer cumplir con el fusil en la mano, aunque lo que manden no tenga ningún sentido».

Pero también interpellaron a la Fuerza Pública, encargada de protegerlos, y desmontaron las trincheras que la Policía había instalado en algunos puntos estratégicos de Toribío y Miranda. Las imágenes de esta acción generaron tanto revuelo como la petición de sus líderes de sacar las estaciones policiales de los cascos urbanos de ambos municipios.

Estamos ante una reacción que es consecuencia de un agobio comprensible, tras años en medio de una confrontación intensa y cruenta. No obstante, hay que tener siempre presente que, si bien la Carta Política les da autonomía en su territorio a los indígenas, ella tiene que darse «de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución», y esta es clara en cuanto no debe haber lugares de la geografía vedados a la Fuerza Pública.

La prioridad de la guerrilla ha sido controlar el territorio más que ganarse a la

población. Las fuerzas del orden no pueden caer en la misma lógica. Hace bien el gobernador del cabildo indígena de Toribío, Marcos Yules, en señalar el contraste entre el puesto de policía de Toribío, debidamente fortificado, y la vulnerabilidad de las casas aledañas, casi en ruinas tras los embates de las Farc. Imagen que ilustra cómo el Gobierno se ha quedado corto en su deber de proteger a la población en su afán de perseguir otros objetivos.

De ahí que hagan falta acciones para que el nexo que debe existir entre población y Fuerza Pública se fortalezca. Hay que tener en cuenta la situación de un departamento que sólo tiene un 10 por ciento de sus vías pavimentadas y que muestra un escandaloso 60 por ciento de su población bajo la línea de pobreza. Dichos datos sugieren que se deben tener tanto proyectos productivos como unidades de fuerzas especiales. Que la inclusión de los pueblos indígenas es tan prioritaria como la derrota de la guerrilla es un mensaje que debería enviar en forma contundente el día de hoy Juan Manuel Santos, cuando visite el Cauca.

http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12019282.html